

Crónica del mes

Marzo-abril

Los salvadoreños cerraron un nuevo ciclo electoral —abierto desde 2003—, con la elección de los funcionarios que gobernarán el país desde las esferas central, local y legislativa. El día 21 de marzo, poco más de tres millones de salvadoreños —3 436 898 ciudadanos inscritos en el nuevo padrón electoral— estaban convocados para elegir al presidente y vicepresidente que gestionarían la nación durante los próximos cinco años. Con ello culminaba una intensa campaña electoral que dijo más de la capacidad de manipulación de los partidos y sus candidatos que de la discusión seria de una agenda nacional. Concluida la fiesta electoral, Elías Antonio Saca, el candidato oficial, se proclamaba ganador; y el FMLN, a regañadientes, aceptaba haber perdido los comicios.

Las viscerales expresiones de Schafik Handal, proferidas al cierre de esa jornada cívica, hablaron de la tónica que marcó la contienda, desde que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hiciera la convocatoria en noviembre de 2003: “es cierto que las cifras de los resultados electorales [...] le dan al señor Saca la presidencia [...], pero no lo felicitamos [...] Esta votación la ha conseguido ARENA y el propio señor Saca con el método del miedo y el chantaje. El voto del miedo es un voto sin libertad”, declaraba el derrotado líder opositor, como reconociendo a medias la victoria del partido oficial.

Producto o no del miedo, lo cierto es que los salvadoreños retornaron a las urnas, registrando niveles inéditos de participación política. La asistencia llegó al 67 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, según el TSE. Pese a que los institutos políticos mayoritarios aumentaron su cuota electoral, el partido ARENA acaparó más de un millón de votos válidos, cantidad nunca registrada por un partido político en presidencia-

les. El FMLN también incrementó su caudal de votos —acumulando más de 800 mil—, pero no le alcanzó para zanjar los más de veinte puntos porcentuales que le separaron del partido de gobierno. El resto de contendientes, el PCN y la Coalición CDU-PDC no alcanzaron los mínimos estipulados que garantizaran su permanencia en el sistema de partidos salvadoreños, desapareciendo según el dictamen del tribunal electoral, pese a los alegatos del pecenismo y la democracia cristiana, las instituciones más viejas del sistema.

Al ritmo del proceso electoral, todas las dinámicas nacionales —políticas, sociales y económicas— no pasaron de ser capítulos efímeros de una armonía compuesta únicamente por los partidos políticos, sus candidatos, los medios de comunicación y el resto de instituciones involucradas directamente en la campaña. Así, por ejemplo, cuestiones que se debatían como la firma del TLC con los Estados Unidos, la aprobación de las reformas a la Ley Antimaras, la descentralización del Estado, la corrupción y otros asuntos de interés público fueron relegados a un segundo plano; o, en el mejor de los casos, fueron utilizados por los partidos como anzuelo electoral para acaparar más votos. Esa tonada se mantuvo hasta el cierre del mes de marzo, con la reestructuración interna del FMLN y de la oposición política como notas principales. En consecuencia, un recuento de los acontecimientos nacionales más importantes acaecidos durante ese mes estará inevitablemente marcado por la pauta electoral.

Lo que vino después —con un breve paréntesis abierto por el período vacacional de la semana santa—, fue una etapa de valoración de los resultados electorales, sobre todo por el lado de la oposición política. Los efemelenistas se debatían por

la conducción de su partido y el PCN y PDC alegaban su supervivencia política por la vía del decreto. Mientras tanto, en la Asamblea Legislativa, los diputados no lograban consensuar sus posiciones para lograr aprobar el presupuesto general del Estado correspondiente al año en curso. Al mismo tiempo, cerrado el capítulo electoral, los legisladores retomaban la discusión en torno a la nueva propuesta de ley antimaras del Ejecutivo, abriendo un nuevo debate luego de que la Corte Suprema de Justicia se pronunciara y declarara inconstitucional una primera ley antimaras que ya expiraba.

Así, uno de los temas privilegiados —a fuerza de una insistente campaña mediática planeada por el partido oficial— de la agenda nacional, a saber, el combate de las pandillas, ya había dejado suficientemente claro su peso electoral: había sido utilizado, no sin éxito, como moneda de cambio electoral. A inicios del mes de marzo, la iniciativa antimaras del Ejecutivo ocupó la atención de los medios escritos y televisivos, mientras éstos anunciaban que las autoridades centroamericanas y mexicanas redoblaban esfuerzos para perseguir a las pandillas que acechaban a los pobladores de la región. En esa tónica, el día 6, los matutinos nacionales reseñaban que los cuerpos policiales del área intercambiarían información sobre los líderes de pandillas y sobre los delitos cometidos por éstos, a fin de agilizar sus capturas.

Paralelamente, los principales medios televisivos y escritos continuaban el ritual de escarmiento público, sacando en circulación imágenes de peligrosos pandilleros capturados por una exitosa policía, pese a que una vez detenidos, tales pandilleros eran liberados por los jueces, que no hallaban suficientes elementos de juicio que incriminaran a aquéllos delito alguno. Así las cosas, la efectividad del Plan Mano Dura y de la cuestionada Ley Antimaras se redujo a elevar la imagen pública de la Policía y del gobierno en tiempos electorales.

El plan gubernamental fue un rotundo éxito en este sentido pues, por un lado, contribuyó a aumentar el apoyo electoral del partido ARENA y, por otro, socavó aún más la credibilidad de un sistema judicial incompetente y de una oposición política —especialmente el FMLN— que fue emparentada con los pandilleros mismos. En ese sentido se leyeron las declaraciones del presidente Francisco Flores, quien en febrero pasado relacionaba la importación irregular de armas de fuego con un presunto plan del FMLN para armar a pan-

dilleros que luego desestabilizarían el proceso electoral recurriendo al uso de la violencia.

Pero Flores tendió a desaparecer del escenario público —dejando que creciera la figura del candidato de su partido—, reapareciendo únicamente para dar alguna estocada a sus adversarios políticos —acusando a los diputados de oposición y a los jueces por su postura ante la Ley Antimaras— y para anunciar, luego de las elecciones, que desistía de su postulación para dirigir la Organización de Estados Americanos (OEA), asunto que había mantenido a la expectativa a la opinión pública nacional e internacional. En efecto, hasta el día 24 de marzo, el mandatario declaraba públicamente su decisión de no correr por la dirección del organismo hemisférico, en competencia con el costarricense Miguel Ángel Rodríguez, quien ya contaba con más de las dos terceras partes de los votos posibles. Flores también dijo renunciar a refugiarse en el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) al culminar su gestión, atendiendo a un acuerdo hecho con otros presidentes centroamericanos.

Volviendo al recuento del proceso electoral, lo más destacable fue, en primer lugar, las dudas que arrojaba la labor del Tribunal Supremo Electoral, que se mostraba incapaz de cumplir a cabalidad sus dos tareas principales: administrar la justicia electoral y garantizar la transparencia del proceso mismo. Así, le era reprochada su incapacidad de resolver las más de cincuenta denuncias interpuestas por los institutos políticos en contienda, lo cual hizo crecer la incertidumbre ante los hechos de violencia protagonizados desde que oficialmente inició la contienda; al mismo tiempo, se señaló la vulnerabilidad del sistema informático que procesaría los datos electorales, sumado a la inevitable partidización de esa entidad. En resumidas cuentas, el ente electoral se presentaba sumamente debilitado ante las justas electorales, pese a los llamados a la cordura de sus dirigentes.

En segundo lugar, los círculos intelectuales y académicos salvadoreños destacaban la pobreza en contenido de la campaña electoral y el vínculo existente entre ésta y la cultura política de los salvadoreños, lo cual sugiere que los directores de campaña pusieron a oídos de los salvadoreños justo lo que la mayoría quería escuchar: mano dura a la delincuencia, seguridad y atención a la economía familiar, pero sin mayores compromisos. Sin lugar a dudas, ARENA supo explotar esos temas mejor que ningún instituto político. En palabras de

Roberto Turcios, columnista de un matutino nacional: “la derecha ha llegado hasta los linderos de la irresponsabilidad con el país, y quizás lo ha sobrepasado. La campaña sobre las remesas es un buen ejemplo, casi un monumento, de su desmesura”. En el mismo espacio editorial, Joaquín Samayoa opinaba, el 16 de marzo, que “la campaña que está por finalizar refleja los atrasos de nuestra sociedad en la construcción de una cultura política que sustente la institucionalidad y las prácticas democráticas”. No faltó la posición de las universidades, organizaciones de la sociedad civil y algunas iglesias, invitando a los candidatos a desarrollar una campaña de altura.

En ese contexto —y como tercer punto—, destacó la intromisión de personalidades extranjeras —principalmente parcializadas a favor de ARENA— en el debate público nacional, quienes abiertamente llamaron a un rechazo del FMLN. A esa campaña a favor de ARENA se unieron personalidades de la talla de Dan Burton, congresista estadounidense; su compatriota Otto Reich, cuya credencial democrática es ampliamente discutida en el hemisferio; y, finalmente, un nutrido grupo de anticastristas y antichavistas. La presencia de esas figuras no causó extrañeza, tomando en cuenta sus orígenes, pero su incidencia real fue poco o nada neutralizada por los asesores de campaña del FMLN, principal blanco de sus ataques.

Por ejemplo, la investidura del cubano-americano Otto Reich, el visitante más vitoreado por la prensa salvadoreña, es cuestionada tanto en Estados Unidos como en las naciones más avanzadas de América Latina. Según Ernesto Carmona, periodista chileno invitado el 29 de marzo por el periódico electrónico *Rebelión*, Reich es “un enviado de muy baja estofa, un interlocutor indeseable, prácticamente un delincuente”. Citando la misma fuente, Reich sería para el intelectual Heinz Dieterich “la mano derecha de la guerra sucia de Bush en América Latina, su embajador plenipotenciario para el hemisferio”. En el país, nadie se tomó la tarea de investigar la identidad y el proceder del distinguido visitante, aunque lo más seguro es que cualquier indicio de crítica habría sido desoída por los propietarios de los grandes medios de comunicación.

Con todo, el proceso electoral iniciaba en marzo con la llegada de los primeros observadores internacionales que vigilarían la realización de los comicios. El día 5, el primer grupo de observado-

res de la OEA arribaba al país, para supervisar los preparativos del TSE. Una de las primeras tareas consistió en verificar el correcto funcionamiento del sistema informático instalado para el procesamiento de los datos electorales. El magistrado electoral por el partido FMLN, Julio Hernández, comentó, tras la llegada de los visitantes, que la misión de la OEA “ayudaría a distensionar el ambiente. Si continúa como está, puede haber una situación difícil el 21 de marzo”. Y no era para menos. Las debilidades del TSE no auguraban un panorama alentador.

El jefe de los observadores internacionales, Diego Paz, aseguró que se rendiría “un informe al consejo mayor de la OEA con base en las condiciones técnicas y políticas” que encontrarían en los días de vigilancia. También hizo un llamado de tranquilidad. El día 7, mientras el TSE realizaba un simulacro del recuento de votos, el sistema informático fue burlado por técnicos de la Junta de Vigilancia Electoral (JVE), lo cual mostró la vulnerabilidad del sistema. “Hemos probado que la aplicación informática tiene fallas de seguridad [...], es posible penetrar el sistema y alterar los resultados”, comentaba el magistrado electoral Juan José Martell.

El 13 de marzo, a poco más de una semana de los comicios, Otto Reich emitió su juicio en torno a las elecciones en El Salvador, mientras visitaba la casa de campaña del partido oficial: “nos preocupa el impacto que tendría una victoria del FMLN sobre las relaciones comerciales, económicas y migratorias de Estados Unidos con El Salvador”, comentó. Reich, naturalmente, increpó a Schafik Handal su amistad con Hugo Chávez y Fidel Castro. Además, agregó amenazante que “Estados Unidos tiene todo el derecho a revisar los aspectos relacionados a la relación diplomática bilateral”, en alusión a un eventual gobierno del FMLN. Ese mismo día, el partido de izquierda concentraba a miles de simpatizantes en la ciudad capital para cerrar su campaña. Un día después, el partido ARENA realizaría su propio cierre de campaña en la misma ciudad.

Continuarían los ataques a la figura de Handal. El día 14, desde la ciudad mexicana de Los Cabos, el empresario de comunicaciones salvadoreño José Roberto Dutriz, vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunciaba al candidato presidencial del FMLN por el altercado que éste tuvo con periodistas de *Telecorporación Salvadoreña*, en febrero pasado. “Denunciamos el

ataque verbal con amenazas a la libertad de prensa por parte del candidato del FMLN”, subrayó el representante salvadoreño en el cónclave de los propietarios de medios de comunicación americanos. La reunión se realizó entre el 13 y el 15 de marzo y el informe sobre El Salvador presentado por los representantes locales ante ese organismo regional contribuyó, evidentemente, a la campaña electoral de la derecha en contra del FMLN.

En efecto, además de denunciar a Handal ante la SIP, los representantes de ese organismo en el país responsabilizaron únicamente al partido de izquierda por las acciones de violencia registradas durante los primeros meses del año, en los que se vieron involucrados activistas de los dos principales partidos políticos: “los constantes enfrentamientos violentos con piedras, palos y otros elementos, entre activistas de iniciativa agresiva del partido de la extrema izquierda FMLN, con lamentables saldos de heridos y arrestados, ponen en peligro la integridad física de los periodistas”, anotaron los celosos emisarios salvadoreños, sesgando la información a favor del partido oficial. Nadie les pidió cuenta por semejante falsificación de la realidad.

Durante la semana previa a los comicios, decenas de salvadoreños llegaron desde el exterior para participar en calidad de observadores o votantes en el evento del día 21. Los más críticos deploraron la campaña del miedo de ARENA con respecto a las remesas familiares. Al decir de Guillermo Chacón, líder comunitario salvadoreño radicado en Nueva York, “el envío de las remesas es una relación familiar, no depende de quién esté en el gobierno central de El Salvador”. Similar posición mostraron otros líderes salvadoreños radicados en las principales ciudades estadounidenses. Sin embargo, no faltó gente de ARENA que aseguraba que vendrían cientos de correligionarios suyos a emitir el sufragio.

El día 16, consultado por un matutino nacional, el magistrado ante el TSE por el FMLN, Julio Hernández, hacía un llamado a la calma, asegurando que el tribunal de elecciones garantizaría la transparencia del proceso: “pueden estar seguros de que no habrá trampa, porque todo el sistema es complicado y basado en la desconfianza y eso lo vuelve difícil”, comentaba. Ese mismo día, las pruebas de seguridad realizadas por el TSE, con la observación de los delegados de la OEA, habrían garantizado la inviolabilidad del sistema informático

que serviría al organismo electoral para procesar los resultados electorales.

El 19 de marzo, a escasos dos días de los comicios, el rotativo *El Diario de Hoy*, abiertamente alineado con el partido de gobierno, publicaba las declaraciones de dos congresistas norteamericanos que, en tono provocativo, alertaban sobre la posibilidad de que El Salvador perdiera los beneficios obtenidos con una victoria del FMLN: “si el candidato del comunista FMLN asume la presidencia de El Salvador, muy bien podría ser necesario para los Estados Unidos reconsiderar nuestra relación con El Salvador, la prolongación del TPS para los ciudadanos salvadoreños y nuestro actual apoyo para el envío de remesas a su país”, en palabras del congresista por el Estado de Indiana, Dan Burton, uno de los creadores, junto con Jesse Helms, del embargo económico a Cuba. Precediendo esa nota, el citado periódico titulaba su editorial: “Corren grave peligro las remesas de EE.UU.”; seguidamente apuntaba que “los salvadoreños deben votar por sus familias, sus libertades, su trabajo y su futuro, no por traficantes de ilusiones con negro pasado”, dejando explícito su apoyo al oficialismo.

El domingo 21 de marzo, un total de 385 centros de votación fueron instalados en todo el territorio nacional para que los ciudadanos ejercieran el sufragio. La policía dijo haber desplegado unos 17 mil agentes para prestar seguridad a los votantes y controlar cualquier anomalía. De acuerdo al TSE, un total de 8 mil 793 urnas esperaban a los casi 3 y medio millones de salvadoreños aptos para ir a votar. En términos generales, la jornada se desarrolló sin mayores sobresaltos. Al cierre de la misma, el TSE había cumplido con gran parte de su responsabilidad al anunciar el inicio del conteo de los votos. Al filo de la noche, ese organismo daba el gane en primera vuelta al candidato de ARENA, Elías Antonio Saca, quien curiosamente ya se había anticipado como triunfador.

Durante la semana siguiente, la nota predominante en la agenda de la prensa nacional fue la crisis en la oposición política, tras conocerse los resultados. Todos los institutos políticos, con excepción del FMLN, quedaban al margen del sistema de partidos salvadoreño, por no haber alcanzado el mínimo estipulado en la legislación electoral. El PCN se negaba a desaparecer y tramaba su permanencia por la vía del decreto legislativo. El PDC se sumió en una nueva crisis que le llevaría al borde de la extinción y las bases del CDU recla-

maban a sus dirigentes por su acercamiento a los democristianos liderados por Rodolfo Parker, de quien resienten cierta afinidad con la derecha. Héctor Silva, el candidato de la Coalición, hablaba de la muerte —ya anunciada— de un proyecto de centro en El Salvador y apuntaba, en su lugar, a la articulación de una izquierda progresista, distinta a la ortodoxia del FMLN. Así las cosas, el FMLN resultó ser el único partido opositor en pie luego de los comicios, pero la derecha salvadoreña —secundada por los grandes medios de comunicación— se volcó a la estrategia de dividir a ese partido, cediendo tinta y micrófonos a sus líderes in-conformes con la cúpula partidaria.

En ese contexto, los detractores de Handal al interior del partido —los “moderados”, según la prensa nacional— empezaron a clamar por la renuncia de la dirección efemenista y el adelanto de las primarias programadas para noviembre próximo. Naturalmente, tomaron protagonismo, entre otros, los alcaldes de Santa Tecla y Nejapa, Óscar Ortíz y René Canjura, respectivamente. El primero, como es sabido, había sido contrincante de Handal en las elecciones primarias que ganó el líder comunista con un cerrado margen. Más tarde se le uniría el alcalde de San Salvador, Carlos Rivas Zamora, quien mostraría cierta independencia respecto de la comisión política del partido de izquierda.

El día 26, el TSE oficializó los resultados electorales, dando al partido ARENA el 57.71 por ciento de los votos válidos y al FMLN el 35.68 por ciento. El resto de partidos, la Coalición CDU-PDC y el PCN no alcanzaron los porcentajes requeridos, quedándose al margen con un 3.90 por ciento y un 2.71 por ciento, en su orden. Ese mismo día, el Tribunal declaró presidente electo a Elías Antonio Saca. La vicepresidenta electa, Ana Vilma de Escobar, también recibió su credencial. Según el tribunal electoral, la asistencia a las urnas llegó al 67.34 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

El 29 de marzo, la dirección del FMLN, dominada por los simpatizantes de Schafik Handal, ordenó silenciar a los detractores del ex candidato presidencial, girando instrucciones para que el debate interno que llevan las tendencias del partido de izquierda no se realizaran más en público. Uno de los mayores críticos de la dirigencia, Óscar Ortíz, aceptó la decisión de la cúpula, aunque expresó su inconformidad: “aquéllos que resisten el cambio no hacen bien, esos que toman una posi-

ción conservadora no están viendo con claridad el futuro, pero de todas maneras hay mucha esperanza en el FMLN”, comentó, dando paso a un momentáneo silencio en el partido. Al cabo de una semana, el día 3 de abril, el coordinador general de ese partido, Salvador Sánchez Cerén, contestaba a Ortíz mientras se dirigía a un grupo de militantes reunidos en San Salvador: “el FMLN no debe cambiar de rumbo [...] tenemos que ser el partido de izquierda que somos”, sentenció.

Así las cosas, el mes de marzo culminó con el debate interno del FMLN, que luego del llamamiento de la cúpula enmudecería temporalmente en los espacios informativos. Luego, en abril, la prensa volvería a los pasillos de la Asamblea Legislativa para cubrir las negociaciones que llevarían a la aprobación del presupuesto general de la nación y a la discusión de una nueva ley antimaras, como principales temas.

El primer día del mes, los noticiarios reportaban una nota favorable para el Ejecutivo: 48 diputados de las fracciones legislativas de ARENA, PCN y PDC levantaron sus manos para aprobar una nueva ley antimaras de carácter transitorio, esta vez bajo el nombre “Ley para el Combate de las Actividades Delincuenciales de Grupos o Asociaciones Ilícitas Especiales”, con una vigencia de tres meses a partir del 3 de abril. Los diputados habrían aprobado la modificación de la anterior normativa antimaras, eliminando la disposición que encarcelaba por el simple hecho de pertenecer a las pandillas. El PCN y el PDC, que habían mantenido una postura escéptica ante la misma, ahora argumentaban que la nueva ley corregía las transgresiones constitucionales de la anterior normativa.

Los legisladores del FMLN y el CDU no apoyaron la moción del Ejecutivo. A juicio de Fernando González, del CDU, la nueva normativa “es una ley inaplicable e inconstitucional”. Un día después de la aprobación, el matutino *La Prensa Gráfica* resumió así el carácter de la nueva normativa: lleva “sanciones más drásticas para los pandilleros, limitantes para los aplicadores de justicia y para el ministerio público”. La actividad parlamentaria llevaría a la discusión de otra ley controversial. Dos semanas después, el día 14 de abril, todas las fracciones legislativas dieron su aval para que se discutiera una Ley de Contravenciones, que sustituyera la vigente Ley de Policía de 1875, y que castigara conductas que, sin llegar a ser delitos —según sus impulsores—, van en contra de la seguridad de

las personas y el orden público. Ello abrió un nuevo debate en los sectores nacionales, sobre la viabilidad de una ley de ese tipo.

Con todo, la algarabía gubernamental por la aprobación de la nueva ley se interrumpió temporalmente tras conocerse una lamentable noticia. El día lunes 5 de abril, desde Irak, llegaba una triste notificación a una humilde vivienda de Ahuachapán: Natividad Méndez Ramos, de 19 años, soldado salvadoreño del batallón Cuscatlán, moría un día antes, abatido a tiros por milicianos chiítas, seguidores del clérigo Mukhdara al Sadar. Junto a Méndez murió un soldado estadounidense y otros 12 salvadoreños resultado heridos de diversa gravedad. La noticia enlutó a los salvadoreños y las reacciones de los críticos al envío de tropas a Irak subieron de tono. La procuradora de los derechos humanos, Beatrice de Carrillo, hizo un llamado al presidente Flores, a fin de dar retorno a los soldados. Por otro lado, la prensa nacional destacaba cómo Méndez, de 14 años de edad, ingresaba a las filas del Ejército para solventar la pobreza que abatía a su grupo familiar en Ahuachapán, uno de los departamentos más excluidos del país.

El reportero de *La Prensa Gráfica* describe así el trágico final del soldado: “a escasos 19 años encontró la muerte fuera de su tierra natal. El soldado murió en Nayaf en la víspera de la Semana Santa y a más de 13 mil kilómetros de distancia de su madre y de sus cinco hermanos”. El ministro de la Defensa Nacional, Juan Martínez Varela, y el presidente Francisco Flores anunciaban que las tropas salvadoreñas permanecerían en Irak hasta acabar su misión en julio próximo, pese al recrudecimiento de la situación en la ciudad que ocupan.

Entre tanto, hasta el 12 de abril, la pausa de la semana santa permitió a los salvadoreños no escuchar más de las recomposiciones internas de los partidos políticos, especialmente de la oposición. La noticia más sonada, además del recuento del centenar de víctimas del período vacacional, fue el retorno del cadáver y velatorio del soldado salvadoreño muerto en Irak. En ese contexto, el día 14, el congresista republicano estadounidense Cass Ballenger, de visita en el país, hizo un reconocimiento público al primer contingente del Batallón Cuscatlán. Según Ballenger, dicho contingente “se ha puesto al lado de las naciones libres del mundo que han escogido oponerse a las fuerzas oscuras del odio, la intolerancia y la opresión”. Secundando al actual mandatario, el presidente electo, An-

tonio Saca, daba su apoyo a la moción en pro del mantenimiento del contingente militar salvadoreño en Irak.

Muchas otras voces que se refirieron a la presencia de los salvadoreños en Irak pecaron de ingenuidad, por no decir, en algunos casos, que se alinearon con la propaganda oficial. La misma procuradora de los derechos humanos declaró, después de la muerte del soldado Natividad Méndez, que hablar de la necesidad de retirar a las fuerzas salvadoreñas inmediatamente de ese país sería un acto de cobardía. La procuradora olvidó que la presencia de los salvadoreños es ilegítima y que la pérdida de vidas inocentes —muchos de los soldados que están lo hacen más por obediencia y necesidad económica que por convicción en la causa que Flores dice defender— vuelve más insostenible e innecesaria su estadía en Irak. En la misma línea, las declaraciones de ciertos líderes religiosos según las cuales la muerte de Méndez obedeció a la contribución del país a la lucha mundial en contra del terrorismo, es pura propaganda oficial, que no tiene asidero alguno en la realidad.

En otro orden, el mes de abril propició también la discusión de la agenda socioeconómica nacional, que se había visto interrumpida debido a la campaña electoral. En materia económica, destacaba el poco optimismo en los sectores nacionales respecto de la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (CAFTA) en el presente año, debido a que ese país celebrará elecciones presidenciales. El congresista norteamericano Jon Kyl opinaba que “el tratado se va a ratificar [...] pero será hasta el próximo año debido al calendario electoral”. Por su parte, el embajador salvadoreño en Washington, René León, consultado el 13 de abril por un rotativo nacional, describía así el proceso de cabildeo político realizado en Estados Unidos: “la campaña de relaciones públicas pretende conseguir apoyo político para aprobar el TLC y promocionar el país como lugar de inversión”. Ese mismo día, los equipos técnicos del gobierno salvadoreño comenzaban en Washington, hasta el 21 de abril, la revisión legal de los textos del tratado para su posterior traducción al español.

Paralelamente, se discutieron asuntos como el papel de las remesas familiares en la economía y la necesidad de crear un gabinete social en el país, mientras *La Prensa Gráfica* publicaba, el día 5 de abril, datos del Banco Central de Reserva (BCR) y la DIGESTYC, en los que se apuntaba que los sal-

vadoreños percibieron, durante el año 2003, un promedio de 4 dólares menos. Según las estimaciones realizadas, los habitantes del área metropolitana de San Salvador habrían sufrido una contracción del ingreso aún mayor: 6 dólares menos que el año 2002. El desempleo también habría aumentado, de acuerdo a las instituciones consultadas. Según la fuente, lo anterior se debe a que el PIB creció al mismo ritmo que la población, en primer lugar, y, en segundo lugar, a que el índice de crecimiento de remesas familiares en las familias se habría mantenido invariable respecto del año 2002.

El día 16, el BCR reportaba que “el ingreso por remesas familiares entre enero y marzo de 2004 fue de 560.0 millones de dólares, observando un crecimiento del 20.4 por ciento respecto al mismo período del año anterior”. De acuerdo a la fuente, “el comportamiento de las remesas familiares ha estado relacionado con una mejoría en el desempeño de la economía estadounidense”. Antes de finalizar el mes, el día 28, la misma institución informó que las exportaciones totales de El Salvador, de enero a marzo de 2004, fueron de 793.7 millones de dólares, es decir, un 1.1 por ciento menos que las registradas en el mismo período del año 2003. “Este fue el resultado —dice el Banco Central— de una contracción en las exportaciones de productos tradicionales de 12.9 por ciento anual y de maquila, 3.4 por ciento anual”.

Según el Banco Central de Reserva, las exportaciones de los productos tradicionales ascendieron a 59.8 millones de dólares, “afectadas por una menor exportación de café, asociada a la reducción en los volúmenes exportados. No obstante —prosigue la fuente—, el precio promedio para el período registró una mejora, vendiéndose a 66.68 dólares por quintal, que comparado con los US\$ 60.17 del año anterior muestra un aumento del 10.8 por ciento”. Las exportaciones de maquila también se habrían contraído “como resultado de una menor demanda de productos de vestuario por parte de los Estados Unidos”, ascendiendo a 442.4 millones de dólares, es decir, 15.7 millones de dólares menos que el período enero-marzo de 2003. Las que sí incrementaron fueron las exportaciones de productos no tradicionales —especialmente las destinadas a Centroamérica— que, llegando a 291.6 millones de dólares, crecieron en 5.6 por ciento. En tanto que las importaciones totales ascendieron a 1 458.2 millones de dólares, el saldo de la balanza comercial de El Salvador sigue siendo deficitario

en 664.5 dólares. Finalmente, la fuente apunta a que los 560.0 millones de dólares que ingresaron en el mismo período en concepto de remesas familiares cubrieron el 84 por ciento del déficit de la balanza comercial. Los datos sugieren, pues, que el crecimiento de las remesas familiares sigue en aumento, pero que las exportaciones de los productos tradicionales se ha estancado, lo cual es preocupante.

Por otro lado, la no aprobación del Presupuesto General de la Nación seguía causando preocupación en muchos sectores. Durante la tercera semana de abril, las carteras de Educación y Salud manifestaban que la falta de presupuesto les impediría, a la primera, contratar unos mil nuevos maestros para atender a una población de 35 mil alumnos recién ingresados al sistema; de la segunda cartera, la falta de presupuesto ponía en peligro el tratamiento de pacientes con VIH y el programa de inmunización de recién nacidos. Los partidos de oposición decían estar listos para aprobar el presupuesto, pero ponían en tela de juicio la partida de “gastos imprevistos” del Ejecutivo, recomendando un recorte de unos 20 millones de dólares de esa partida. Por su parte, ARENA recomendaba quitarle unos 17 millones a la Corte Suprema de Justicia para reorientarlos a la Universidad de El Salvador y al Ministerio Público. El FMLN, que negociaba con ARENA la aprobación, proponía que el recorte fuera de unos 12 millones. Pese a la urgencia, algunos diputados de oposición anunciaban sus intenciones de postergar la aprobación hasta que Antonio Saca tomara posesión de su cargo, el próximo 1° de junio. Así las cosas, el mes culminó sin que los diputados llegaran a algún acuerdo al respecto.

Entre tanto, el día 21, FUSADES comenzaba a recomendar medidas concretas al futuro gobierno. Su presidente, Antonio Cabrales, dijo ese día que la economía de libre mercado y la globalización no habían dado la solución para ejecutar una política social coherente, en el marco de la XXI Asamblea General Ordinaria celebrada por esa institución. FUSADES sugirió crear un gabinete social y una secretaría técnica para facilitar una política social estratégica; al mismo tiempo, recomendó la creación de fuentes de empleo para proteger a los más vulnerables.

En esa línea, el 23, FUSADES se unió al Banco Mundial para presentar a los empresarios del país y al nuevo gobierno las recomendaciones que

se encuentran en el documento *Memorando económico sobre el país*, elaborado por expertos de la institución financiera internacional. En resumidas cuentas, el Banco Mundial pidió la elaboración de una consistente política social, en sintonía con la propuesta de FUSADES y otros sectores nacionales. El fin del mismo era evaluar la aplicación de las medidas sugeridas por ese organismo durante la década de los noventa y recomendar nuevas líneas de acción en los sectores que aún muestran déficit, pese a la reforma económica ensayada desde ese decenio.

Oficialmente firmado en diciembre de 2003, llama la atención que el documento, con un contundente llamado a consolidar una verdadera política social, no fuera presentado ante la sociedad salvadoreña sino hasta concluida la coyuntura electoral. Asunto sobre el cual no estaría de más especular, en tanto que coincide, al menos en lo de la necesidad de una política social, con el énfasis de las plataformas de gobierno de la izquierda. Pero, más allá de esa nimia apreciación, resulta interesante observar que las recomendaciones de ese organismo internacional, contrario a lo que pretendían dar a entender los medios informativos, no constituyen novedad alguna. Es decir, las recetas más trilladas —realizar esfuerzos coordinados en salud, educación e infraestructura; incentivar la inversión y el comercio internacional e invertir en tecnología— ya han sido propuestas por entidades nacionales —entre ellos el mismo FUSADES— que, por falta de voluntad de quienes llevan las riendas del país, por incapacidad o por desinterés, no han sido tomadas en cuenta.

Uno de los ejes principales que guió el citado informe es la articulación entre una política económica responsable y una política social de Estado todavía pendiente en el país. Sobre la primera, el dictamen del Banco Mundial es bastante claro: la economía nacional avanzó considerablemente durante la primera mitad de los años noventa, siguiendo a cabalidad las recomendaciones realizadas; sin embargo, desde la segunda mitad de ese decenio hasta la actualidad se generó una desaceleración prolongada de la economía, cuyas causas aún están por determinarse. Respecto del segundo asunto —la consolidación de una política social— el mensaje no es menos claro: los esfuerzos realizados en materia social deben realizarse coordinada y equilibradamente, de modo que se cree una especie de “gabinete social”, tomando en cuenta

los recursos limitados y la capacidad institucional existente. Ello no implicaría —se colige de lo dicho por los especialistas— crear nuevas carteras, sino, entre otras cosas, reorientar fondos, coordinar las acciones, redefinir las competencias y articular los esfuerzos con las autoridades locales.

Para culminar el mes, la mañana del 28 de abril, un grupo de sindicalistas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) tomó las instalaciones de la Catedral Metropolitana, así como las calles adyacentes a la misma. A mediodía, un pelotón de antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC) procedió a desalojar a los sindicalistas que estaban en las calles, con lo cual comenzó un enfrentamiento que culminó en la captura de varios sindicalistas, entre ellos el dirigente Ricardo Monge. Los incidentes no acabaron ahí, sino que se extendieron por varias calles del centro de San Salvador. La policía utilizó gases lacrimógenos y vapuleó a los sindicalistas que tuvo a su alcance. Algunos grupos de manifestantes quemaron cabinas telefónicas, incendiaron un vehículo de *Telecorporación Salvadoreña*, saquearon algunos negocios y agredieron a periodistas de medios escritos y radiales. Los agentes policiales desalojaron las calles por la fuerza. Como una extraña reacción a lo anterior, un grupo de supuestos estudiantes de la Universidad de El Salvador se tomó algunas calles de la periferia del campus, en protesta por la detención de Monge y de sus compañeros. Por la noche, los manifestantes continuaron con la quema de dos unidades del transporte colectivo.

Los sindicalistas del ISSS justificaron la toma aduciendo que se trataba de un mecanismo para presionar al gobierno, a fin de que restituyera a los trabajadores despedidos como consecuencia de la huelga del año pasado y para que se sentara a dialogar con ellos. Funcionarios de gobierno acusaron inmediatamente al FMLN, aduciendo que este partido estaba detrás de las acciones registradas en la capital. Ellos se habrían basado en el hecho de que algunos diputados de ese partido se hicieron presentes para escuchar a los sindicalistas. En vista de la agresión que sufriera un equipo de *Telecorporación Salvadoreña*, la Sociedad Interamericana de Prensa condenó los hechos: “Condenamos la forma en cómo el sindicato del ISSS pretende manifestarse, con violencia, con atentados a la propiedad privada de los medios de comunicación y contra la integridad física de los periodistas”, dijo el vicepresidente regional de ese orga-

nismo, José Roberto Dutriz. Pero más allá de eso, la toma de Catedral fue un síntoma de la necesidad de entrar en diálogo, a escasos días para que Antonio Saca asuma la presidencia. Es de justicia subrayar que el diálogo implica señalar los yerros de una y otra postura.

Evidentemente, tomar la Catedral Metropolitana como medida de presión no fue el medio más apropiado para conseguir una mesa de diálogo con el gobierno, aunque sí para agitar y crear la sensación de inestabilidad. Las demandas de los sindicalistas no eran de carácter reivindicativo, propias de una lucha sindical, sino generales e incluso hasta vagas. No se trataría tanto de una lucha sindical como de una lucha política partidaria, disfrazada de sindicalismo. Una acción como ésta tiene mucho de provocación y, tal como probablemente era la expectativa de sus dirigentes, el gobierno cayó en ella con mucha facilidad, arrastrado por sus tendencias represivas innatas.

Las capturas innecesarias y la violencia desproporcionada con las cuales el gobierno respondió fue otra provocación. Abrió las puertas al descontento popular y al vandalismo. Contrario a lo que sostiene la versión oficial, el vandalismo y la violencia no fueron sólo responsabilidad de los sindicalistas y de los descontentos, sino de la policía. La intervención represiva de ésta contribuyó a generar más desorden y violencia y también temor en la población. En este aspecto, sindicalistas y gobierno coincidieron. El gobierno deseaba una oportunidad para reprimir a los descontentos y así dar su "merecida" lección a quienes coquetean con la idea de la protesta callejera, y los sindicalistas buscaban la forma de exhibir ante la opinión pública el carácter autoritario y represivo de aquél.

Además, la interpretación predominante de esos hechos fue distorsionada, puesto que los equiparó con el ataque del cual fueron objeto los empleados de una empresa mediática, la ya señalada *Telecorporación Salvadoreña*. En este sentido, no debiera identificarse la agresión a una determinada empresa mediática con un ataque a la libertad de prensa, como lo hicieron las empresas atacadas. Si la prensa fuera realmente libre e independiente del gobierno y del gran capital, estos ataques violentos no se producirían. El objetivo del ataque fue la empresa y no la prensa. Es cierto que de por medio están sus empleados, los periodistas; pero éstos debieran ser conscientes que no atacan su profesión, sino a la empresa para la cual trabajan. Los

hechos demuestran que tienen un empleo de alto riesgo y, en consecuencia, debieran exigir las prestaciones correspondientes a su empleador. No pueden, pues, argüir con la libertad de prensa cuando son agredidos, mientras la empresa para la cual trabajan arremete de manera sistemática, desde sus páginas y sus ondas, contra los adversarios del gobierno y los ricos. No deben esperar ser recibidos o tratados como periodistas, cuando trabajan para una empresa que considera adversarios a todos aquellos que no comulgan con sus ideas, las del gobierno y las de los ricos, por lo cual los ataca sistemáticamente sin ninguna restricción legal, ni ética.

En definitiva, pues, los meses de marzo y abril han sido cruciales para el destino del país. No sólo se han elegido a las nuevas autoridades del país, sino que aparecen indicios, aunque tímidamente, de que se podría entrar en estado de diálogo para discutir asuntos vitales de la vida nacional. Desde la reestructuración del sistema de partidos salvadoreños hasta la evaluación de la gestión de Flores que casi culmina, en ambos meses los salvadoreños se han instalado a las puertas de un nuevo gobierno que, pese a prometer abrirse al diálogo, todavía es prematuro lanzar juicios favorables a esas promesas. Del legado de Flores hay mucha tela que cortar.

La última gran decisión del actual presidente en materia internacional, a saber, el envío de tropas a Irak, ha sido duramente cuestionada. Alegar que la contribución de los contingentes salvadoreños es humanitaria y está orientada a la reconstrucción es otro absurdo, pues desde hace meses esas tareas se encuentran paralizadas, por el rechazo de la población iraquí a la intervención extranjera. Por eso, las autoridades salvadoreñas pretenden detallar que las tropas brindan seguridad a quienes se dedican a esas labores, lo cual tampoco es cierto. De todas maneras, es una colaboración que es rechazada con ataques mortales. Ya hay un soldado salvadoreño muerto y varios lesionados.

Para colmo de males, el costo de la operación recae sobre el presupuesto nacional. Su monto es aún desconocido y las autoridades militares y políticas, las mismas que hablan mucho de transparencia, se niegan a revelarlo, porque, con toda seguridad, es muy elevado y darlo a conocer sería un escándalo. Al comienzo, esas autoridades aseguraron que los gastos serían cubiertos por Estados Unidos. Ahora resulta que la participación salvadoreña en la ocupación estadounidense de Irak, una aventura imperialista, típicamente, contribuye al

déficit fiscal salvadoreño. Si de ayuda humanitaria, de reconstrucción y de crear empleo se trata, en El Salvador hay mucho por hacer. Si se hay que conservar la Fuerza Armada y mantenerla con los impuestos de la ciudadanía, ésta debiera contribuir a aliviar las inmensas necesidades de El Salvador.

En el marco de la vida política nacional, la izquierda ha quedado nuevamente en crisis, aunque no le guste aceptarlo. Sin embargo, una buena conducción de la misma podría ser beneficiosa para el partido, si éste la enfrenta con madurez e inteligencia política. Una evaluación de la conducción del partido durante el proceso electoral se ha mostrado inevitable. Asimismo, es inevitable que esa evaluación desemboque en reacomodos internos. Una evaluación serena y seria es una necesidad que debiera enfrentarse con los menores traumas posibles, es decir, sin una nueva fragmentación, que sólo favorecería a su adversario principal, y correría el peligro de reducir al FMLN a un grupo cada vez más pequeño, aunque muy radical y beligerante. El aislamiento es lo que menos le conviene. La imposición para mantener la unidad a toda costa no es, sin embargo, una alternativa aceptable.

Si el partido abre espacios internos para ventilar y discutir sus diferencias, los descontentos no tendrían necesidad de usar la tribuna pública, que los grandes medios de comunicación les ofrecen con gusto. Estos disfrutan mostrando el espectáculo de un FMLN que se lía a gritos y golpes y que se divide una vez más, por falta de capacidad para escuchar, revisar y cambiar. No es a los que piensan como la dirigencia actual a quienes más hay que escuchar, sino a los descontentos de dentro y de fuera del partido. No es saludable que la dirección induzca los criterios para evaluar lo sucedido, ni que sus miembros más destacados asistan a las sesiones de evaluación como comisarios políticos, encargados de vigilar que nadie se aparte de la línea oficial. De lo que se trata es de abrir espacios para que la militancia exprese sus aciertos y desaciertos, sus reclamos e insatisfacciones. La crisis no se resuelve imponiendo un determinado punto de vista que niega lo evidente. Ocultar la realidad con la imposición de la línea de la dirección actual contribuye poco.

Al FMLN se le ha presentado un dilema: ¿cómo, siendo un partido para el pueblo salvadoreño empobrecido y excluido, son las clases medias las que más votan por él y las que menos lo hacen, las clases populares? No se trata, pues, de remover dirigentes, ni de sustituir a unos por otros. El desa-

fío que el FMLN tiene planteado es más complicado que un simple recambio de dirigencia, aunque ello no está excluido. En consecuencia, además de evaluar su desempeño, el FMLN debe reflexionar y discutir bastante. Si su actual dirección contrastara opiniones con un interés genuino por estar a la altura de las circunstancias, su conducción sería más eficaz. No tiene mucho tiempo para ello. Apenas cuenta con un año de transición hacia los próximos comicios, pues en doce meses, el país entrará en un nuevo periodo electoral.

Entre tanto, la derecha se encuentra envalentonada. Con la legitimidad de ARENA en las urnas, se sentirá en la potestad de continuar con las políticas ensayadas desde hace 15 años. La campaña mediática de ARENA para sembrar miedo contra el FMLN consistió en señalar que, de ganar el partido de izquierda, sólo cabría esperar un futuro en el que imperase el autoritarismo estatal, caracterizado por la pobreza extrema, por el éxodo de capitales e inversiones, por las largas colas de racionamiento y la pérdida de los importantes vínculos con Estados Unidos. Sin embargo, poco se dijo sobre las consecuencias de continuar el modelo económico implantado por la derecha desde que Alfredo Cristiani se hizo del poder.

En materia económica, cabe esperar algo totalmente distinto de la trillada promesa que afirma que "lo mejor está por venir". De hecho, ni siquiera el FMLN, el CDU ni el PCN podrían garantizar un futuro económico mejor bajo el actual pulso de las finanzas públicas del país y su estado de estancamiento económico. La salud macroeconómica de El Salvador, hay que decirlo claramente, ya no es ni estable ni sostenible. En ese sentido, el margen de maniobra del equipo de Saca es bastante modesto, por no decir limitado.

La maquinaria productiva ya no tiene los medios para hacer avanzar la economía y, por tanto, tampoco es una ayuda para mejorar las condiciones de vida de la gente. Sus factores productivos ya no contribuyen al crecimiento como lo hacían antaño. Las remesas familiares cada vez más juegan un papel fundamental en la economía y le dan vida a ésta, mientras la productividad nacional se encuentra postrada. Resulta que solamente cuando existía en el país una política de mayor inversión estatal o inyección de recursos para incrementar la eficiencia, la tecnología y la productividad de las áreas productivas, como en la primera mitad de los sesenta o la primera mitad de los noventa, la

productividad total de los factores sí contribuyó positivamente en el crecimiento.

Como quiera que sea, la gestión del Ejecutivo que heredará Saca dependerá, en gran parte, de un presupuesto general del Estado que los diputados de la Asamblea Legislativa no logran aprobar, por la falta de consensos, pese a que la coyuntura electoral concluyó. La labor de esta institución vital del Estado se halla, igualmente, en la mira de los ciudadanos. A inicios del mes de marzo, la investigación de un matutino nacional apuntaba a que el trabajo de la Asamblea Legislativa durante enero de 2004 había sido prácticamente improductivo, de acuerdo a un informe interno de esa institución. Según ese informe, todas las comisiones habrían trabajado únicamente 151 horas efectivas durante los 31 días de ese mes. Además, decía el informe, cada sesión plenaria —de las cinco que se realiza-

ron durante el mes— reportó, en promedio, la ausencia de 32 de los 84 diputados. Sin embargo, los legisladores siguieron cobrando sus jugosos salarios. Lo que se puede esperar del Primer Órgano del Estado y de otras instituciones está en esas cifras y a ellas hay que atender.

Habrà que esperar, a partir de junio, una discusión nacional que lleve al próximo gobierno a sentarse a dialogar sobre los problemas más urgentes de El Salvador. Antonio Saca ya ha comprometido su palabra, repartiendo a diestra y siniestra sus intenciones de escuchar a los diferentes sectores de la sociedad. Ahora habrá que fijar en el calendario el próximo 1° de junio, cuando el presidente electo reciba la investidura de la primera magistratura del país y tenga la oportunidad de cumplir a la ciudadanía lo que le prometió en campaña.

